

Editorial

¿Adiós a todo eso? Los avatares de la «cuarta transformación»

Humberto Márquez Covarrubias*

El movimiento lopezobradorista se inscribe dentro de la tradición populista latinoamericana, aunque es un emisario tardío de su tercer cohorte generacional, el de la oleada «progresista». El antecedente del populismo en México es el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), de los años treinta, con el cardenismo a la cabeza, y después durante los cuarenta y los setenta, ya con la nueva denominación de Partido Revolucionario Institucional (PRI). En América Latina también ha habido populismos y su era dorada fue entre mediados de los cuarenta y mediados de los sesenta. La segunda ola populista va de la mano de la socialdemocracia en los setenta y ochenta. Después es eclipsado por el neoliberalismo y resurge, en un tercer ciclo, acompañado del «progresismo» sudamericano.

Los rasgos populistas del lopezobradorismo son variopintos, pero identificables. Se trata de un movimiento político supeditado al liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador, un peculiar caudillo laico-cristiano. La hegemonía política de esta formación corresponde a una dirección entre burguesa y pequeñoburguesa que amalgama al sector empresarial de derecha y a intelectuales de centro-izquierda. Detenta una

* Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

ideología nacionalista decimonónica con incrustaciones de todo tipo, desde religiosidad evangélica y católica, pasando por el populismo hasta un neoliberalismo encubierto.

La formación partidaria denominada Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no es precisamente un partido nuevo, sino que deviene de partidos anteriores que fueron abandonados como la piel de una serpiente: Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Mexicano Socialista (PMS), el PRI, entre otros. Debido a la larga campaña electoral en que cimentó su triunfo, esta organización se asume como un partido-movimiento que opera, a su vez, como un frente electoral en alianza con partidos políticos y organizaciones de las más diversas y contrapuestas ideológicas. Cuenta con una gran base popular multclasista donde convergen trabajadores, campesinos, profesionistas, pequeños empresarios y políticos profesionales; sin embargo, renuncia a asumir la representación de clase y en su lugar se identifica con la entelequia de «pueblo», por oposición a la «mafia del poder». Una vez en el poder, el lopezobradorismo dice ser el genuino, sino es que el único, representante del pueblo en su conjunto («bueno y sabio», con remembranzas cristianas y roussonianas) y adopta una política de tipo bonapartista, esto es, supuestamente se eleva por encima de las clases sociales y de los conflictos entre ellas («gobernar para pobres y ricos»). Pero en última instancia está al servicio de los intereses del capital en general (los «mercados», el «crecimiento», la «inversión», los «megaproyectos») y del imperialismo estadounidense en particular («libre comercio», contención de migrantes centroamericanos, política de seguridad militarizada). De manera conspicua establece vínculos con sectores específicos de la burguesía mexicana, algunos de los magnates más identificados con los gobiernos anteriores (la «mafia del poder»), lo cual no está exento de confrontaciones

con otra facción de la burguesía que apostó por las candidaturas más resueltamente derechistas del Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI. Sin embargo, se hacen gestiones para limar asperezas, desde la oficina del jefe de gabinete, ocupada por un empresario derechista, Alfonso Romo. En claro contraste, no se despliega un acercamiento semejante, concreto, con trabajadores, movimientos sociales y comunidades de base, a quienes, por el contrario, se les ataca discursivamente, colocándolos en el saco genérico de los «adversarios» y «conservadores», donde figuran indistintamente todos quienes osen criticar al gobierno, sean de derechas o de izquierdas, de las clases trabajadoras o del empresariado. La política asistencialista contribuye a desmovilizar a las organizaciones sociales y colectivos para reconfigurarlos como ese pueblo idílico al que se dice gobernar, sin admitir ningún contenido clasista como sujetos explotados y dominados, sino como bases sociales de apoyo al gobierno con una funcionalidad electoral manifiesta. La renuencia a tomar decisiones antiimperialistas y marcar una distancia con los gobiernos latinoamericanos que expresan esa intencionalidad política pone de relieve las relaciones de «amistad», por no decir sumisión, con el presidente Donald Trump, declaradamente hostil hacia los mexicanos, en tanto que se invoca la doctrina Estrada («no intervención») para eludir un eventual liderazgo latinoamericano y la solidaridad política con gobiernos que pudieran ser afines a la línea «progresista», con todas sus limitaciones.

En las últimas décadas, los gobiernos de ascendencia popular en América Latina se adscriben al «giro progresista» y proclaman un proyecto «posneoliberal». Emergen con el respaldo de frentes electorales conformados por movimientos sociales y enarbolan un programa centrado en el crecimiento económico y la distribución del ingreso, para ello se gestiona

la reproducción del capital, así sea con programas extractivistas o maquiladores, y se respalda el consumo de sectores pobres. El soporte de esta forma de gobernar ha sido la formación de economías de enclave operadas por el gran capital mediante el neoextractivismo y la exportación de materias primas en un contexto de precios internacionales favorables, donde el gobierno toma una parte de la renta del suelo concesionado (*government take*), lo cual le permite conformar una bolsa para financiar al gobierno y los programas de asistencia social. A la postre, el despliegue de esa fórmula de gestión estatal posibilita la construcción de una hegemonía política, pero no produce un genuino cambio social.

Así como la vertiente productiva del progresismo latinoamericano ha sido la de incentivar el crecimiento neoextractivista y redistribuir parte de la renta, el gobierno lopezobradorista puede ser considerado bajo esa pauta como un miembro tardío de la corriente posneoliberal y populista. En el caso de México, la apuesta se remite al salvamento de la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) y la construcción de la refinería de Dos Bocas, como si se fraguara una reedición del «milagro mexicano» verificado entre los cincuenta y setenta del siglo pasado, cuando la petrolización impulsó el crecimiento económico, en un contexto internacional favorable signado por la expansión capitalista de posguerra, la demanda de petróleo y otras materias primas y los acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Aquel fue el momento de esplendor del pacto populista mexicano comandado por el PRI y la corporativización de los sectores campesino (Confederación Nacional Campesina [CNC]), obrero (Confederación de Trabajadores de México [CTM]) y popular (Confederación Nacional de Organizaciones Populares [CNOP]). No obstante, el punto de quiebre devino con el colapso de los precios internacionales y el consecuente estallamiento de

la crisis en 1973. Este crucial episodio fue aprovechado estratégicamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para imponer los programas de ajuste estructural y desde ese momento se derrocó el proyecto de «industrialización por sustitución de importaciones» o el llamado «milagro mexicano» con su ideología nacionalista, mediante un contundente golpe de timón operado desde el mismo poder político del Estado y bajo la continuidad de la hegemonía del PRI-gobierno para suplantarlo el pacto populista con la adopción de la política neoliberal y la reinsertión subordinada de la economía a la égida del capital global. La petrolización de la economía era una especie de extractivismo exportador basado en la bonanza del mercado mundial que insufló el desarrollismo mexicano, un idílico «desarrollo estabilizador», pero no se acompañó con la generación de bases científico-tecnológicas para alentar la industrialización y la reestructuración del aparato productivo y la promoción de cambios sociales sustantivos, más allá del corporativismo priista.

En América Latina, los gobiernos de centro-izquierda que derrotaron a la derecha neoliberal impulsan el ciclo progresista y un renovado pacto populista, pero México arriba tardíamente, incluso cuando pareciera estar en retirada o en un momento de reflujo, al menos en Brasil, Argentina, Ecuador, Honduras, Paraguay, debido a la imposición de gobiernos de derecha neoliberal, por la fuerza o por las urnas. El lopezobradorismo no se ha identificado con ese fenómeno, guarda silencio, marca su distancia, y más bien prefiere presentarse como aliado obediente del gobierno estadounidense de Trump y retomar la política de no intervención para eludir la toma de postura en los conflictos de América Latina. En esa línea se refrenda el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) —versión trumpista del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)—,

además de corresponder a la exigencia de contención militarizada de los migrantes centroamericanos, entre muchas otras disposiciones). Por añadidura, se enuncian inverosímiles posturas neoconservadoras, que retoman agendas retrógradas de las Iglesias evangélicas, premisas que favorecen a los grandes capitales y a los intereses imperialistas, acometidas contra grupos feministas, en suma, un cúmulo de giros ideológicos y prácticas políticas ajenas a la izquierda laica, republicana y soberana.

El progresismo también tiene una vertiente cultural que suele desentenderse de la cuestión económica, pues se orienta a luchas simbólicas, identitarias y los derechos de las minorías, en torno a temas como el medio ambiente, la equidad de género, los pueblos indígenas, la diversidad sexual, el consumo de marihuana, etcétera. El lopezobradorismo es ambiguo en este terreno, pues su líder tiene un cariz conservador (evangelista) y moralista, al igual que muchos de sus aliados derechistas. En este aspecto, el frente electoral muestra una indefinición ideológica o una confusión programática, quizá deliberada para abarcar los más variados flancos del espectro ideológico, lo cual presagia algunos desencuentros. No existe, sin embargo, un fuerte impulso de articulación entre la parte económico-política y la vertiente cultural, en detrimento de la coherencia del supuesto proyecto transformador. De hecho, el ala izquierdista morenista es más posmoderna, identitaria y culturalista, que económico-política, y resueltamente muy lejana de posiciones abiertamente socialistas o comunistas.

Sin embargo, el lopezobradorismo no se define a sí mismo ni como populista ni como progresista, sino que pretende definirse en oposición al «neoliberalismo», entendido como una forma de corrupción política, cuando en realidad se siguen los postulados y políticas neoliberales en el ejercicio del gobierno. Para esta vertiente política el problema no es el capitalismo,

sino la forma neoliberal del capitalismo, por lo que, se supone, el capitalismo puede ser «humanizado» o «moralizado», y en esa lógica los empresarios privados no explotan al trabajador, no se apropian de trabajo ajeno, sino que sus ganancias son bien habidas. La solución mágica es suprimir la corrupción política, aplicar la austeridad fiscal y abatir los privilegios de diversos sectores de trabajadores. Desde un imaginario decimonónico resplandece una obstinación por rastrear los antecedentes de la historia patria, la historia de bronce, tan cara a la ideología nacionalista-revolucionaria del viejo PRI, donde se enaltecen los hechos heroicos de los próceres, los mitos del nacionalismo, como si se fueran a escribir nuevos capítulos en ese añejo libro, y en esa trama ideológica se promulga la «cuarta transformación», supuestamente heredera de las gestas patrióticas: independencia, reforma y revolución.

Más allá de la subjetividad política y de la simiente ideológica que envuelve a todo proyecto político, el programa de gobierno se presenta como antineoliberal o posneoliberal. Esta postura resulta muy contradictoria, pues es más declarativa que efectiva. El neoliberalismo es definido como una especie de corrupción política —de hecho todo el discurso lopezobradorista gira en torno a la corrupción, como la matriz de todos los males— y se esgrime como una explicación unívoca, monocausal, de cuanto problema se afronta. Por supuesto, se omite el hecho de que el susodicho neoliberalismo es un proyecto de clase, del capital contra el trabajo; una correlación que el gobierno no pretende modificar en su estructura profunda.¹

¹ A decir verdad, el neoliberalismo no es tan nuevo, puesto que replica o actualiza las atrocidades del capitalismo victoriano, además de que no es liberal si se considera que esa perspectiva no acepta la autocracia. Algo similar se puede decir de la noción de «Estado mínimo» y su axioma que predica que el «Estado no debe intervenir en la economía», toda vez que el Estado es un poder muy activo para desplegar la acumulación de capital. Tampoco es admisible la noción de «libre mercado», en una economía donde campean los monopolios internacionales.

Ideológicamente es una arista del neoconservadurismo que alienta el individualismo, la libertad y la autonomía individual, contra el colectivismo, el progresismo y el socialismo. En definitiva, es la careta ideológica de los grandes monopolios, el capital financiero y el poder del gran dinero. Aunque tiene una agenda clara en contra de lo público, de los trabajadores y de lo común, se traviste con proclamas favorables al combate a la corrupción, la responsabilidad social y la economía verde. Como sea, el fantasma del neoliberalismo deambula por los pasillos de la «cuarta transformación»: si por los discursos fuera, pareciera ser su némesis, pero perdura en los hechos como una política inercial, una continuidad tecnocrática en las sombras. El régimen político en ciernes puede, incluso, ser concebido como *populismo neoliberal*.

Además de los rasgos populistas y progresistas, donde se conjugan las variantes extractivista y asistencialista, en la dimensión económica el programa lopezobradorista atiende al término neodesarrollista. El neodesarrollismo es una vertiente teórico-política que, ante el desencanto del neoliberalismo, se entiende como el programa que postula la intervención del Estado, la política económica procrecimiento, la industrialización, la reducción de la brecha tecnológica y la imitación del modelo del Sudeste Asiático. En remembranza del desarrollismo de la época de industrialización por sustitución de importaciones, del crecimiento arropado en el «desarrollo estabilizador», y como tentativa de superar al neoliberalismo, así sea sólo en el discurso, el proyecto económico lopezobradorista plantea una suerte de neodesarrollismo a la mexicana. Sin embargo, los promotores empresariales del lopezobradorismo, quienes comandan el brazo político-económico de este gobierno, han formulado el *pejenomics*,² un programa proempresarial

² *Pejenomics: hacia una economía para todos* (2018), recuperado de <https://drive.google.com/file/d/1GQgu7IT-fGn-HTFNJY9WyAXgeBuAu0jo/view>

que garantiza la continuidad neoliberal y el apego a la mercadocracia. La otra vertiente es el asistencialismo social programa mediante transferencias monetarias operadas por la banca privada afiliada al gobierno (Banco Azteca) que actúa como intermediaria y se apropia de un jugoso nicho de mercado, sin que tengan cabida las organizaciones de la sociedad civil o instancias financieras del sector social que pudieran tener vínculos directos con la «economía popular». Por tanto, el neodesarrollismo lopezobradorista puede definirse como la suma de neoliberalismo y neopaternalismo. Desde este punto de vista, el objetivo principal es gestionar la reproducción del capital a través del crecimiento económico, la inversión privada y la ganancia; en ese marco se agrega la atención de la pobreza mediante las consabidas políticas asistencialistas-electoreras. El *pejenomics* se basa en un catálogo limitado de «megaproyectos» de infraestructura, el relanzamiento del TLCAN renombrado como T-MEC, la imposición de la austeridad (la profundización del ajuste neoliberal), la preservación de una política fiscal no progresiva, el subsidio a la nómina de las empresas privadas al otorgar becas a aprendices, la promoción de la inversión privada y el militarismo como brazo punitivo y resguardo político del gobierno en turno.

Por su carácter multclasista, el gobierno puede ser considerado populista, pero su orientación político-ideológica corresponde al nacionalismo burgués: el vetusto «nacionalismo revolucionario». Para el nacionalismo burgués, el patriotismo está anclado en el régimen de la propiedad privada y su nacionalismo no significa la consecución del bienestar de la mayoría de la población que constituye una nación integrada, sobre todo, por las clases trabajadoras. El nacionalismo decimonónico arrastra prejuicios como religión y, al final de cuentas, la propaganda política. El postulado de la unidad nacional, una estrategia política ya ensayada por los frentes

populares latinoamericanos y ahora reeditada, tiene como corona la preponderancia de la comunidad empresarial, es decir, la burguesía nacional, a quien se atribuye funciones primordiales en la generación de empleo, inversión, crecimiento y bienestar. En el presente, el sentido de unidad se construye ideológicamente y se disemina en la opinión pública, mediante un uso desmedido de conferencias diarias, que más que informar, deliberar y decidir sobre los grandes problemas nacionales, es una plataforma de propaganda política que convierte al pueblo imaginario en un espectador inmovilizado y al espacio público en una arena de golpeteo político. En el ideario de la unidad nacional no existen desigualdades sociales, antes bien se busca que los trabajadores y los desclasados defiendan al nuevo bloque de poder, articulado por facciones de la burguesía nacional y de los políticos profesionales, y con ello que se identifiquen con el régimen de acumulación y el sistema de poder, por lo que terminan apoyando a sus explotadores y a quienes los dominan y oprimen. El nacionalismo burgués pretende hacer avanzar los intereses de las clases altas, los grandes capitalistas, como si con ello se defendiera el interés de la nación. Los príncipes del mercado y los barones del dinero son los protagonistas y grandes aliados del régimen político en ciernes. En lugar de dar la tierra a quien la trabaja, se le otorga al capital extractivo; en vez de organizar el trabajo autónomo y desenajenado, se promueve la servidumbre con becas de aprendizaje. Los intereses del bloque en el poder son tomados como los intereses nacionales, y al contar con un fuerte respaldo electoral el gobierno asume que representa un profundo carácter legítimo y nacionalista. Sus políticas y acciones serán inequívocas. Con ese razonamiento y amparado en el respaldo popular buscará ampliar sus espacios de poder y pretenderá gobernar a nombre del bienestar nacional.

El discurso retórico y demagógico es un viejo dispositivo ideológico que utilizan los políticos de las más variadas formaciones partidarias, pero en el caso actual se trasmina cotidianamente al pueblo idílico, a la nación mexicana, como un bálsamo de moralidad, veracidad y pragmatismo, en aras de refrendar la adhesión de las masas y consolidar el proyecto político.

Con el recurso de esa práctica política se renueva el nacionalismo mítico: los héroes, los padres de la patria, la raza de bronce y la religión, pero de manera particular se cristaliza la ficticia fusión del pueblo en la nación y, sobre todo, la unión del pueblo en torno al gran líder impoluto. El estilo personal de gobernar, más que el ejercicio desparpajado y pedestre del gobierno del Estado significa la perpetuación de la campaña política, y la virtual conversión de la política en un espectáculo de masas condescendientes. Con la consolidación de una masa desbordante de votantes perpetuos, que «votan» respaldando al líder en encuestas de opinión, que «votan» dando *likes* a las redes sociales, que «votan» sintonizando las conferencias presidenciales, se formaliza a un tipo peculiar de ciudadano, supuestamente popular y movilizado, cuando en realidad es un espectador pasivo y atomizado. El ocultamiento de los problemas reales, de los problemas estructurales y las contradicciones del capitalismo, sin exponerlos públicamente, menos aún buscando medidas para solucionarlos, ha servido también como ideología del desarrollo y el progreso, ha sido herramienta de los cultores del neoliberalismo y de los populistas. El nacionalismo desarrollista sirve como ideología de la incipiente burguesía para eludir los proyectos transformadores y de cambio. La retórica de la nación mítica es complementada con la prédica neodesarrollista. Sobre los intereses abstractos y comunes de los individuos que conforman una nación, terminan prevaleciendo los intereses concretos de las clases dominantes. El nacionalismo es

capaz de crear naciones imaginarias, idílicas, pero no así de transformar su estructura social y su inserción en el mundo global.

Los temas clave del gobierno lopezobradorista son la corrupción, la austeridad, la militarización y la moralización.

La principal bandera política es el combate a la corrupción. Esta cuestión no es novedosa, se remonta a los noventa, cuando el BM la impone en la agenda internacional, como parte de la estrategia de reconversión del Estado hacia las pautas del mercado. Luego de que fuera considerado un problema «tabú» por estar catalogado en la esfera política, el BM, en consonancia con otros organismos internacionales, coloca el tema de la corrupción y de la lucha contra la corrupción como un asunto central del proyecto neoliberal que busca reestructurar al Estado y acondicionarlo a las exigencias del capital y el mercado (BM, 1997). Desde entonces se han creado organismos, programas y políticas de lucha contra la corrupción. El problema de la corrupción se inserta en la agenda ortodoxa para el desarrollo, como un componente de las políticas de «buena gobernabilidad» y una premisa para despolitizar el aparato del Estado en la puja por ampliar los espacios de capitalización y mercantilización. En concordancia con organismos internacionales y organizaciones civiles empresariales, el diagnóstico y el programa de gobierno del lopezobradorismo es monotemático: el principal problema es la corrupción y el programa de gobierno se centra en la lucha contra la corrupción. Esto no significa, en modo alguno, un cuestionamiento a las contradicciones estructurales del capitalismo ni a las formas de explotación y dominación, las cuales no reconoce, ni siquiera a la trama económica-política del capitalismo neoliberal sino sólo, de manera reduccionista, a los malos gobierno, políticos deshonestos e individuos que se enriquecen, a la sazón de sus adversarios. En la reconstrucción de los daños,

se busca moralizar al Estado, que tenga credibilidad ante su pueblo y ante los inversionistas internacionales y nacionales que se adhieran a su credo. Según López Obrador, primero como candidato y luego como presidente, citando datos del BM, al desaparecer la corrupción se recuperará 20% del presupuesto nacional, un billón de pesos, pero según sus cálculos el latrocinio sólo representa 10%, equivalente a 500 mil millones de pesos al año, recursos con los cuales, presuntamente se financiaría el desarrollo nacional (Reza, 2018).

El segundo puntal, rayando en la obsesión, es la austeridad, que moralistamente se denomina «franciscana» y políticamente «republicana», pero en realidad es neoliberal, como dictan los cánones del capital financiero y los programas de ajuste estructural. Pese a su revestimiento ideológico de tipo nacional populista, la austeridad es, a final de cuentas, un dispositivo político de corte neoliberal que proclama el equilibrio fiscal, la disminución de los impuestos al capital o no la fiscalidad progresiva, el recorte del gasto social, la disminución de empleos públicos, la desvalorización del trabajo, la transferencia de funciones públicas al mercado. Es una «receta para el suicidio», como diría Stiglitz, exvicepresidente del BM, que llega impuesta por la constelación de organismos internacionales que regulan el comercio, la inversión y las finanzas. Prescripción que los gobiernos nacionales en turno adoptan comedidamente. En esa tónica, la esfera estatal y el ámbito de lo público son atacados y señalados como corruptos e ineficiente (un «elefante reumático») y lo privado se considera como eficiente, competitivo y fuente de crecimiento, empleo y bienestar. La consigna, llevada al extremo, es constreñir al Estado hasta su mínima expresión y ampliar dos de sus funciones, el Estado gendarme y el Estado dadivoso. A su manera, López Obrador impone el criterio de la austeridad («republicana»)

mediante el dogma del superávit primario, la disminución del presupuesto, el subejercicio del gasto, la venta de activos públicos, el recorte de programas, el despido de trabajadores y la disminución de salarios. Aún más, en tono moralista habla de la austeridad «franciscana», una alusión al ascetismo cristiano y un regodeo simbólico-político sobre el estilo personal de gobernar (disminución del salario, uso de vuelos comerciales, etcétera), como si el presidente más poderoso de los últimos tiempos que vive en el Palacio Nacional realmente viviera igual que el pueblo pobre. El discurso dirigente arguye que drenando recursos de la austeridad, vendiendo activos públicos y conteniendo la corrupción se generará un cúmulo de recursos más que suficientes para sustentar a los programas asistenciales y detonar el crecimiento económico, sin necesidad de implementar una reforma hacendaria ni utilizar el gasto público como palanca del desarrollo. Con todo, el núcleo duro del gobierno sigue siendo la tecnocracia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), los mandones de las finanzas públicas que determinan las directrices neoliberales, ajustan los presupuestos, establecen los criterios generales de política económica y vigilan el desempeño macroeconómico en consonancia con las señales del mercado y las determinaciones del capital financiero. Además, es más que perceptible el influjo empresarial, instalado en la jefatura de la Oficina de la Presidencia y en el Consejo Asesor Empresarial.

El tercer componente es la militarización, incluso ya en grado superlativo, el militarismo. El neoliberalismo se ha sostenido con la mano dura, la mano militar, pero también algunas versiones del populismo. Al final de cuentas, las Fuerzas Armadas aparecen como el «cuarto poder» del Estado. En México, durante los últimos sexenios, la implementación de la llamada «guerra contra las drogas», una guerra de amplio espectro, incluía

la militarización. Como en muchos otros temas torales, contraviniendo a sus promesas de campaña, López Obrador plantea dar continuidad a esa tendencia castrense mediante la formación de una policía militarizada, la Guardia Nacional y la adecuación de un marco constitucional *ad hoc*. En esta lid, se configura al país como un perímetro de seguridad del vecino del norte, interesado en contener los flujos migratorios y la criminalidad, y de articular las zonas económicas afiliadas, además de que es un espacio virtual de contención de proyectos inopinadamente socialistas y comunistas, o cuando menos antiimperialista. Además de los grandes empresarios, no cabe duda de que el otro gran aliado del lopezobradorismo son las Fuerzas Armadas. El pacto político con las Fuerzas Armadas es uno de los componentes más fuertes del nuevo gobierno y al Ejército se le quiere lavar la cara y asemejarlo con el «pueblo bueno», puesto que se presenta como «el pueblo uniformado». Sintomáticamente, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hace acreedora de mayor presupuesto, diversos rubros sociales sensibles, como educación y salud, son rebajados. Además, se le conceden actividades lucrativas, como la administración de un nuevo aeropuerto e inversiones inmobiliarias, entre otras. Por omisión, se hace tabla rasa de un pasado colmado de hechos trágicos de violación de derechos humanos, contrainsurgencia, represión, colusión con el narcotráfico e impunidad. De una parte, la *mano invisible* del gran dinero y, de la otra, la *manu militari*.

El cuarto pilar es la moralización, que como corresponde a una postura de ese tipo, está cargada de prejuicios. La política de moda es moralizar el Estado y la sociedad, una política que tiene su antecedente en el gobierno priista de Miguel de la Madrid, el precursor del neoliberalismo en México, quien puso en juego su política de «renovación moral», a principios de

los ochenta. Al igual que entonces, el lopezobradorismo reedita la *Cartilla moral* de Alfonso Reyes para proclamar una ilusoria e idílica «república amorosa», donde perviven valores como el amor al prójimo, la felicidad, la fe y la esperanza. Mientras que la república política no tiene una carta de navegación, ya que la *Constitución política* sigue siendo desmantelada, parchada y zurcida, cambiada por órdenes supremas y usada como herramienta política para golpear a los adversarios y ampliar los espacios de poder. Pero como documento político donde se asienten los derechos sociales, las garantías laborales, las mejoras sociales, siguen siendo letra muerta. Como si fuera poco, el pensamiento mágico religioso invade los espacios públicos y se inocula en el discurso del líder plenipotenciario. Amén de que se potencia el activismo político de grupos evangélicos y se cita a la *Biblia* como fuente de sabiduría y remanso metafísico donde se encuentran las respuestas a los problemas de la actualidad. Ello pese a que también se insiste en el Estado laico y la figura de Benito Juárez como emblema republicano. Por añadidura, persiste la doctrina moralizadora de la seguridad nacional, próxima al populismo punitivo, basada en la invención de un enemigo interno, el narco, fuente de la violencia maligna, según el discurso del poder, para lo cual se quiere «pacificar» al país y canalizarlo a una agenda de justicia transicional, esquema aplicado en zonas de conflicto armado para desmovilizar a los grupos sociopolíticos en resistencia; pero a trasmano se libra una guerra social de baja intensidad, en contra de sectores populares poseedores de bienes comunes, de movimientos sociales y líderes comunitarios (Flores, 2017).

La noción de «cuarta transformación» es efectista en términos discursivos y propagandísticos, pero no tiene correlato en la praxis política ni en las verdaderas intenciones del gobierno en turno: cuando mucho se trata de

un reformismo adocenado. En la trama ideológica del nacionalismo revolucionario de cuño priista, la burguesía emergente de la Revolución mexicana que detentaría el poder económico y político, y se convertiría en clase dirigente, el Estado mexicano moderno ha sido cofigurado y transformado durante la independencia, la reforma y la revolución, y, ahora, se supone que vendría su cuarta transformación; sin embargo, en esta línea histórica del estatismo mexicano se omite que el régimen posrevolucionario consistió en la larga hegemonía priista gestora del desarrollo capitalista y que la última gran transformación bajo su férula, aún vigente en el seno del Estado y de la sociedad mexicana, ha sido el neoliberalismo, en realidad una modalidad de gestión del capitalismo subdesarrollado y dependiente, que entraña una contrarreforma del pacto social, pero que significa un decidido proyecto de consolidación oligárquica. En todo caso, resulta del devenir de una formación social capitalista, cuyos rasgos han sido el subdesarrollo ancestral.

La correlación de fuerzas es crucial para desbrozar las posibilidades de transformación social. A sabiendas de que se libra una prolongada lucha de clases, donde el sector capitalista dispone de una conciencia de clase acendrada y está organizado, dispone de recursos y actúa en consecuencia. En tanto que los políticos profesionales de los diversos partidos se acusan mutuamente de ser incapaces para gobernar y transformar la sociedad, con lo cual esgrimen una dosis de verdad, pero son funcionales, pese a sus escarceos y exabruptos, a la reproducción del capitalismo mexicano. La lucha en contra del estatismo y el populismo, el neoliberalismo y la corrupción política, no culminará firmando cheques en blanco a los políticos que se han turnado por periodos el relevo presidencial, las gubernaturas y el control de las legislaturas. La transformación social sustantiva, en tanto supone

un proyecto de emancipación humana, significa una colosal tarea colectiva, que ilusamente puede cristalizar en un proyecto político partidista desde donde se proyecta el derrotero de un país a partir de las ideas de un feliz hombre habitante de un palacio.

Referencias

- Banco Mundial (1997). *Informe del desarrollo mundial 1997. El Estado en un mundo en transformación*. Banco Mundial.
- Flores, J.M. (2017), «Justicia transicional, acuerdos de paz en Guatemala y cosmovisión maya-quiché». En Castillejo, A. (ed.), *La ilusión de la justicia transicional: perspectivas críticas desde América Latina y Sudáfrica*. Bogotá: Universidad de Los Andes.
- Reza, G. (2018, 6 de marzo). López Obrador acusa que la corrupción «depende mucho del proceder del presidente». *Proceso*. Recuperado de <http://www.proceso.com.mx/525079/lopez-obrador-acusa-que-la-corrupcion-depende-mucho-del-proceder-del-presidente>